



Consejo Económico  
y Social

Distr.  
GENERAL

E/CN.4/1990/35  
30 de enero de 1990

ESPAÑOL  
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
46° período de sesiones  
Tema 15 del programa

APLICACION DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA REPRESION  
Y EL CASTIGO DEL CRIMEN DE APARTHEID

Informe del Grupo de los Tres establecido con arreglo  
a la Convención

Presidente/Relator: Sr. Volodymyr VASSILENKO (RSS de Ucrania)

I. INTRODUCCION

1. La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, que fue aprobada por la Asamblea General en su resolución 3068 (XXVIII), de 30 de noviembre de 1973, entró en vigor el 18 de julio de 1976, el trigésimo día después de la fecha de depósito en poder del Secretario General de las Naciones Unidas del vigésimo instrumento de ratificación o adhesión. Al 31 de diciembre de 1989, había 88 Estados Partes en la Convención (véase el documento E/CN.4/1990/32, anexo).

2. En virtud del artículo VII de la Convención, los Estados Partes se obligan a presentar periódicamente al Grupo establecido con arreglo al artículo IX informes sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otro orden que hayan adoptado para poner en práctica las disposiciones de la Convención.

3. De conformidad con el artículo IX de la Convención, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos está autorizado para nombrar un grupo compuesto de tres miembros de la Comisión, que sean al mismo tiempo representantes de Estados Partes en la Convención, para que examinen los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo VII. El Grupo puede reunirse por un período que no exceda de cinco días, antes de la apertura o después de la clausura del período de sesiones de la Comisión, a fin de examinar los informes presentados con arreglo al artículo VII.

4. De conformidad con el artículo IX de la Convención y de la resolución 31/80 de la Asamblea General, el Presidente del 45° período de sesiones de la Comisión nombró miembros del Grupo a los representantes de Nigeria, Panamá y la República Socialista Soviética de Ucrania.

5. En su resolución 1989/8, la Comisión decidió, entre otras cosas, que el Grupo de tres miembros de la Comisión designado conforme al artículo IX de la Convención celebrase, antes del 46° período de sesiones de la Comisión, una reunión cuya duración no fuese superior a cinco días para examinar los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo VII; encomió a los Estados Partes que habían presentado informes, y pidió que los que aún no lo habían hecho presentasen sus informes lo antes posible; reiteró su recomendación de que los Estados Partes tuviesen plenamente en cuenta en la presentación de sus informes las directrices dadas por el Grupo en 1978 (E/CN.4/1286, anexo); y pidió al Grupo de los Tres que, a la luz de las opiniones expresadas por los Estados Partes en la Convención, prosiguiese el examen del alcance y la naturaleza de la responsabilidad de las empresas transnacionales respecto a la persistencia del sistema de apartheid en Sudáfrica, inclusive las medidas jurídicas que pudieran adoptarse con arreglo a la Convención en contra de las empresas transnacionales cuya actuación en Sudáfrica estuviese comprendida en la definición de crimen de apartheid, y que informase a la Comisión en su 46° período de sesiones.

## II. ORGANIZACION DEL PERIODO DE SESIONES

### A. Asistencia

6. El Grupo celebró su 13° período de sesiones (1990) en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, del 22 al 26 de enero de 1990. Abrió el período de sesiones el representante del Secretario General. La composición del Grupo fue la siguiente:

Nigeria:	Sr. Scott Oguma E. Omene
Panamá:	Sra. Lourdes C. Vallarino
República Socialista Soviética de Ucrania:	Sr. Volodymyr Vassilenko

### B. Elección de la Mesa

7. En la sesión celebrada el 22 de enero de 1990, el Grupo eligió como Presidente/Relator al Sr. Volodymyr Vassilenko.

### C. Programa

8. En la sesión celebrada el 22 de enero de 1990, el Grupo examinó el programa provisional (E/CN.4/AC.33/1990/L.1) presentado por el Secretario General y aprobó el siguiente programa para su período de sesiones de 1989:

- "1. Apertura del período de sesiones por el representante del Secretario General.

2. Elección de la Mesa.
3. Aprobación del programa.
4. Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo VII de la Convención.
5. Examen de la actuación de las empresas transnacionales que operan en Sudáfrica (resolución 1989/8 de la Comisión).
6. Informe del Grupo a la Comisión de Derechos Humanos."

### III. EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO VII DE LA CONVENCION

9. El Grupo tuvo a la vista los siguientes documentos: a) una nota del Secretario General (E/CN.4/1990/32) relativa a la situación de la Convención y a los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo VII de la Convención, y b) los informes presentados desde el 45° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos por: Checoslovaquia (E/CN.4/1989/31/Add.10); Filipinas (E/CN.4/1990/32/Add.1); India (E/CN.4/1990/32/Add.2); Pakistán (E/CN.4/1990/32/Add.3); China (E/CN.4/1990/32/Add.4); Burundi (E/CN.4/1990/32/Add.5); y Bahamas (E/CN.4/1990/32/Add.6).

10. El Grupo procedió al examen de cada informe en presencia de los representantes de los Estados informantes, que habían sido invitados a asistir a las reuniones del Grupo de conformidad con las recomendaciones hechas por el Grupo en su período de sesiones de 1979 y períodos de sesiones subsiguientes. El Grupo examinó el informe de las Bahamas sin la participación de un representante del Estado informante.

#### Checoslovaquia

11. El cuarto informe de Checoslovaquia (E/CN.4/1989/31/Add.10) fue presentado por el representante del Estado Parte, quien declaró que su Gobierno había apoyado plenamente la Declaración sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas en el África meridional, adoptada en el décimosexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, en diciembre de 1989, y puso de relieve, en particular, que esa Declaración había ampliado las posibilidades que la comunidad internacional tenía en su lucha contra el apartheid. A las sanciones obligatorias y generales contra Sudáfrica y su total aislamiento, se había añadido la posibilidad de una solución negociada entre todos los sectores de la población sudafricana. Declaró que su Gobierno, sin abandonar otras medidas, apoyaba esa nueva posibilidad. La presión política interna dentro de Sudáfrica junto con la presión internacional podrían crear probablemente la atmósfera necesaria para la erradicación total del sistema de apartheid en ese país.

12. Los miembros del Grupo desearon saber de qué manera se aplicaban en Checoslovaquia las resoluciones y decisiones correspondientes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. También se pidió información para conocer

si Checoslovaquia mantenía algún vínculo económico, cultural o de otra índole con Sudáfrica, y si las empresas transnacionales que operaban en Sudáfrica estaban prohibidas en Checoslovaquia.

13. En respuesta a estas preguntas, el representante del Estado informante declaró que su país no mantenía vínculos de ninguna clase con Sudáfrica y que las empresas transnacionales que operaban en Sudáfrica no podían operar en Checoslovaquia. En lo que se refería a las resoluciones y decisiones de los órganos de las Naciones Unidas, o de otros órganos internacionales que su país se había comprometido a aplicar, éstas eran aplicadas por los órganos pertinentes del Estado. El Grupo tomó nota con satisfacción del informe y elogió al representante del Estado Parte por su detallada presentación. El Grupo señaló que, de conformidad con las obligaciones derivadas del artículo IV de la Convención, todos los Estados Partes se habían comprometido a adoptar las medidas legislativas específicas o de otro orden que fueran necesarias para reprimir e impedir el crimen de apartheid, y a perseguir, enjuiciar y castigar, conforme a su jurisdicción, a las personas responsables o acusadas de ese crimen.

#### Filipinas

14. El segundo informe periódico de Filipinas (E/CN.4/1990/32/Add.1) fue presentado por el representante del Estado informante, quien lamentó que la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica, que constituía una burla de lo que era bueno en la civilización humana, siguiera todavía dominando el pensamiento del Gobierno de ese país. Puso de relieve que su Gobierno estaba plenamente comprometido con la erradicación del sistema de apartheid. A ese respecto, señaló que Filipinas cumplió una función activa en las deliberaciones del decimosexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre "el apartheid y sus consecuencias destructivas en el Africa meridional".

15. Declaró también que la posición de Filipinas respecto de la discriminación racial en general había quedado ampliamente demostrada en el informe inicial presentado por Filipinas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR/C/50/Add.1/Rev.1), y en los informes periódicos octavo, noveno y décimo presentados por Filipinas con arreglo a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD/C/172/Add.17). Señaló que en los párrafos 35 a 42 de este último documento, relativos al artículo 3 de la Convención, "que estipula que "los Estados Partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza", dan una enumeración detallada de las medidas adoptadas por su Gobierno para combatir la discriminación racial, incluido el apartheid. A este respecto declaró que Filipinas sigue aplicando el Decreto Presidencial N° 1350 A, de 17 de abril de 1978, el cual califica de ilegales todas las violaciones del artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y establece penas por esas actividades.

16. El Grupo tomó nota con satisfacción del segundo informe de Filipinas y observó que había sido preparado de conformidad con sus directrices generales. Los miembros del Grupo desearon conocer el carácter exacto de las

penas previstas en dicho decreto; se pidió también información con respecto a si en Filipinas existía una legislación específica que se ocupara de los delitos de apartheid, así como las medidas adoptadas por el Gobierno para informar al público sobre los males del apartheid.

17. En respuesta a esas preguntas, el representante del Estado Parte declaró que el Decreto Presidencial N° 1350 de 1978 preveía penas adecuadas por delitos de discriminación racial, y que en los programas de enseñanza de las escuelas primarias y secundarias se impartía enseñanza sobre los derechos humanos, incluida la enseñanza acerca de los males de la discriminación racial y del apartheid.

18. El Grupo observó que, de conformidad con las obligaciones derivadas del artículo IV de la Convención, todos los Estados Partes se han comprometido a adoptar las medidas legislativas específicas o de otro orden, que sean necesarias para reprimir e impedir el crimen de apartheid, y a perseguir, enjuiciar y castigar, conforme a su jurisdicción, a las personas responsables o acusadas de ese crimen.

#### India

19. El tercer informe periódico de la India (E/CN.4/1990/32/Add.2) fue presentado por el representante del Estado informante, quien subrayó que el Gobierno de su país había liderado, durante muchos años, la lucha internacional contra la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica. Manifestó que la India, incluso antes de la proclamación de su independencia, había promulgado un decreto (1946) por el que se imponía una amplia sanción económica contra Sudáfrica y había manifestado invariablemente su oposición a la política de apartheid en todas sus manifestaciones. Señaló que la India había promulgado legislación concreta -la Ley contra el apartheid de 1981- para hacer frente a la cuestión del crimen de apartheid, según se describe en su segundo informe (E/CN.4/1983/24/Add.6, anexo). Así pues, se ha respetado plenamente el requisito de que los Estados Partes adopten las medidas legislativas necesarias para poner en vigor las disposiciones del artículo IV de la Convención. Manifestó asimismo que estaban prohibidos los vínculos de toda clase con Sudáfrica.

20. El Grupo tomó nota con reconocimiento del segundo informe de la India y observó que dicho informe era ejemplar en cuanto a su elaboración y se había ajustado a las directrices generales. El representante del Estado informante fue elogiado por la manera detallada e informativa en que había presentado el informe. El Grupo tomó nota con reconocimiento de que la India había promulgado legislación concreta para hacer frente al crimen de apartheid. A este respecto, el Grupo pidió a todos los Estados Partes que aún no lo habían hecho que siguieran el mismo ejemplo.

#### Pakistán

21. El informe inicial del Pakistán (E/CN.4/1990/32/Add.3) fue presentado por el representante de ese Estado Parte, quien subrayó que las disposiciones de la Constitución y de las leyes penales prohibían todos los actos de racismo y garantizaban el derecho a la igualdad ante la ley sin distinción alguna en cuanto a la raza, el color o el origen nacional o étnico. Además, de acuerdo

con las enseñanzas islámicas, se consignaban en la Constitución los principios de igualdad, tolerancia y justicia social. También se adoptaron disposiciones para que los poderes ejecutivo y legislativo observaran y respetaran ciertos derechos fundamentales y para que el ciudadano pudiera recurrir al ombudsman con el fin de rectificar cualquier injusticia cometida contra él por un funcionario público. La Constitución establecía asimismo la obligación de salvaguardar los derechos e intereses de las minorías, incluida la representación adecuada de las mismas en los servicios federales y provinciales. Además, el Pakistán suscribía el parecer de que el apartheid constituía un crimen de lesa humanidad y una amenaza para la paz internacional, por lo que había que adoptar medidas concretas para erradicar ese fenómeno. El orador añadió que su Gobierno había impuesto una prohibición completa al comercio con Sudáfrica, no concedía facilidad alguna de aterrizaje y sobrevuelo a las aeronaves sudafricanas, había cerrado sus puertos a los buques sudafricanos y se habían suspendido todos los intercambios culturales, educacionales y deportivos.

22. El Grupo tomó nota con reconocimiento del informe y elogió al representante del Estado Parte por su exposición. Se solicitaba información adicional sobre la aplicación por el Pakistán de lo dispuesto en los artículos II y XI de la Convención y sobre cualesquiera otras medidas que hubiera adoptado el Gobierno para impedir que las personas jurídicas establecieran relaciones con empresas sudafricanas. Con referencia a los artículos IV y VI de la Convención, se señaló que la legislación nacional debería prever medidas apropiadas que versaran específicamente sobre el crimen de apartheid. En su respuesta, el representante explicó que la política del Gobierno era tal que impedía a cualquier nacional del Pakistán establecer vínculos comerciales con Sudáfrica. Además, los pasaportes expedidos por el Gobierno no autorizaban a los nacionales del Pakistán a entrar en Sudáfrica. Finalmente, citó ejemplos de jugadores de críquet que se habían abstenido de visitar Sudáfrica. En cuanto a los actos mencionados en el artículo II de la Convención, recordó que la legislación del Pakistán establecía igual protección ante la ley sin discriminación alguna.

#### China

23. El segundo informe periódico de China (E/CN.4/1990/32/Add.4) fue presentado por el representante del Estado Parte, quien destacó las disposiciones constitucionales y legislativas que garantizaban la igualdad de derechos de todas las 55 minorías nacionales que existían en China. Además, manifestó que en las zonas en que las minorías nacionales vivían concentradas en comunidades, se habían establecido zonas autónomas y órganos de autogobierno, que se salvaguardaba el derecho a la libertad de creencia religiosa y que se habían adoptado varias medidas preferenciales de política con el fin de ayudar a las minorías nacionales a acelerar su desarrollo económico y cultural. Señaló asimismo que el apartheid estaba considerado en China como un crimen de lesa humanidad y una amenaza para la paz internacional, y que su Gobierno deploraba la asistencia directa que prestaban ciertos países occidentales al régimen racista de Sudáfrica. Añadió que China suscribía todas las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión del apartheid, que su Gobierno proporcionaba asistencia material a las víctimas del apartheid, que no mantenía vínculos directos o indirectos con Sudáfrica y que abogaba en favor de la aplicación de sanciones más amplias y eficaces contra Sudáfrica.

24. El Grupo tomó nota con satisfacción del informe y elogió al representante del Estado Parte por su exposición y por los esfuerzos desplegados por su Gobierno en la lucha contra el apartheid. Se observó con satisfacción que el informe había sido preparado en estricta conformidad con las directrices generales. Se solicitó información adicional acerca de las medidas adoptadas por China para incorporar los objetivos de la Convención en el sistema de educación y familiarizar a la población con la lucha contra el apartheid, y acerca de los derechos a la libertad de creencia religiosa en la Región Autónoma del Tíbet. Con referencia a los artículos IV y VI de la Convención, se recordó que la legislación nacional debería prever medidas adecuadas que versaran específicamente sobre el crimen de apartheid. En su respuesta, el representante del Estado Parte señaló que la información sobre la lucha contra el apartheid se suministraba a través de los medios de información, y que se había preparado material didáctico sobre la discriminación racial y la política de apartheid con destino a la escuela primaria, secundaria y superior de China. Subrayó asimismo que el 15 de julio de 1988 se había celebrado en Beijing un acto público para conmemorar el 70° aniversario de Nelson Mandela.

#### Burundi

25. El segundo informe periódico de Burundi (E/CN.4/1990/32/Add.5) fue presentado por el representante del Estado informante, quien hizo una breve exposición general del contexto político y social dentro del cual se aplicaban los derechos humanos en Burundi. A pesar de los trágicos acontecimientos de agosto de 1988, el Gobierno estaba decidido a asegurar la protección de los derechos humanos sin distinción de ninguna clase. A partir de esos acontecimientos, la Tercera República había ampliado el Gobierno y establecido una comisión para estudiar la cuestión de la unidad nacional. Manifestó asimismo que los refugiados que habían huido de la violencia habían regresado al país, que la unidad nacional y la cuestión étnica eran objeto de debate a todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad y que se estaba preparando una Carta de la Unidad Nacional. Añadió que el apartheid se consideraba en Burundi crimen de lesa humanidad y una amenaza para la paz internacional, que su Gobierno suscribía la idea de la inmediata puesta en libertad de todos los presos políticos, en particular del Sr. Nelson Mandela, que Burundi no mantenía ningún tipo de relaciones con el régimen de apartheid de Sudáfrica y que apoyaba activamente los movimientos de liberación nacional en Sudáfrica.

26. El Grupo tomó nota con reconocimiento de la declaración preliminar del representante del Estado informante. Sin embargo, se expresó la esperanza de que el Gobierno tendría en cuenta las directrices generales al presentar sus futuros informes. Se solicitó información adicional acerca de las medidas que se habían adoptado para dar publicidad a la Convención en Burundi y para poner fin a las relaciones diplomáticas, comerciales o de otra índole con Sudáfrica. Se preguntó asimismo si en la legislación de Burundi se hacía referencia expresa al crimen de apartheid. En su respuesta, el representante del Estado Parte explicó que se recurría a todos los medios de información para movilizar a la opinión pública contra el crimen de apartheid. Manifestó asimismo que su Gobierno prohibía todas las exportaciones a Sudáfrica y las importaciones procedentes de ese país, y que si se encontrara un supuesto infractor en el territorio de Burundi, las autoridades extraditarían a esa persona o la llevarían ante un tribunal.

Bahamas

27. El informe inicial y el segundo informe de Bahamas, presentados en un documento (E/CN.4/1990/32/Add.6), fueron examinados sin la participación del representante del Gobierno. El Grupo tomó nota del informe y observó que éste había sido preparado de acuerdo con sus directrices generales. Sin embargo, lamentó que, en ausencia del representante del Estado informante, los miembros del Grupo no podían obtener respuestas a sus preguntas. El Grupo recomendó que, en aras de la aplicación efectiva de la Convención, era indispensable que los Estados Partes designaran a representantes para participar en sus reuniones cuando se examinaran los informes presentados por sus gobiernos.

28. Los miembros del Grupo deseaban saber si se había promulgado ya la nueva legislación a que se hacía referencia en el informe, y observaron que, en virtud de esa legislación, el crimen de apartheid sería un delito en las Bahamas, lo que ponía de manifiesto la aplicación efectiva y concreta por ese país de las disposiciones de la Convención. También se solicitaron aclaraciones acerca de las salvedades a la denegación de visados de entrada a los ciudadanos sudafricanos, en particular acerca de cómo podría el Gobierno determinar si un ciudadano sudafricano había demostrado su "participación activa en el movimiento contra el apartheid en Sudáfrica". Se observó que algunas de esas salvedades menoscababan la eficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno de las Bahamas con miras a la aplicación de las disposiciones de la Convención.

IV. EXAMEN DE LA ACTUACION DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES  
QUE OPERAN EN SUDAFRICA

29. Con arreglo a la petición formulada en la resolución 1989/8 de la Comisión de Derechos Humanos, el Grupo de los Tres continuó examinando si la actuación de las empresas transnacionales que operaban en Sudáfrica y en Namibia estaba comprendida en la definición del crimen de apartheid y si se podía tomar alguna medida jurídica contra ellas conforme a la Convención, y, habida cuenta de las opiniones expresadas hasta la fecha por Estados Partes en la Convención (Bulgaria, Burundi, Checoslovaquia, Ecuador, Madagascar, México, Panamá, Perú, República Árabe Siria, República Democrática Alemana, República Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista Soviética de Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), organismos especializados (Organización Internacional del Trabajo) y organizaciones no gubernamentales (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y Federación Democrática Internacional de Mujeres) (véase E/CN.4/1986/46, E/CN.4/1987/27 y Add.1 y 2, E/CN.4/1988/31 y Add.1 a 3, E/CN.4/1989/32 y E/CN.4/1990/34 y Add.1 y 2), examinó el alcance y la naturaleza de la responsabilidad de las empresas transnacionales en cuanto a la persistencia del sistema de apartheid en Sudáfrica.

30. El Grupo encomió a los Estados Partes que habían expuesto sus opiniones y proporcionado información y pidió a los que aún no lo habían hecho que las presentasen lo antes posible. El Grupo opinó que había que seguir estudiando la cuestión y que las opiniones y la información recibidas de todos los Estados Partes en la Convención sobre el alcance y la naturaleza de la responsabilidad de las empresas transnacionales por la persistencia del sistema de apartheid en Sudáfrica serían de la mayor utilidad.



31. El Grupo tomó nota de que varios órganos de las Naciones Unidas habían continuado señalando a la atención de la comunidad internacional la estrecha relación existente entre las actividades de las empresas transnacionales que operaban en Sudáfrica y el mantenimiento del régimen racista en Sudáfrica.

32. El Grupo observó, en relación con las opiniones y la información presentadas, que todos los Estados Partes estaban de acuerdo en cuanto a la necesidad de imponer sanciones contra el régimen de apartheid, de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, apoyando así al pueblo de Sudáfrica en su legítima lucha por la libertad y la igualdad, y expresaron la esperanza de que en el futuro se comunicaran al Grupo propuestas más concretas a este respecto.

33. El Grupo reiteró que la función desempeñada por las empresas transnacionales en Sudáfrica era triple: en primer lugar, agotaban los recursos naturales de Sudáfrica y de Namibia, que pertenecían al pueblo; en segundo lugar, explotaban la fuerza de trabajo de esa región con el único objetivo de obtener mayores beneficios, y, en tercer lugar, al operar en Sudáfrica, fortalecían el régimen de apartheid, ayudaban a perpetuar la opresión de la mayoría africana y fomentaban la represión contra los que luchaban por su independencia.

34. En ese contexto, el Grupo rechazó, por considerarla totalmente infundada, la afirmación de que la actuación de las empresas transnacionales que operaban en Sudáfrica y la estrecha cooperación existente entre ciertos países y el régimen racista de Sudáfrica en las esferas política, económica y militar y en otras esferas estaban ayudando a hacer que mejorase la crítica situación de la abrumadora mayoría de ese país y contribuían a hacer más humano el sistema de apartheid.

35. El Grupo apoyó la conclusión de que las empresas transnacionales que operaban en Sudáfrica, por su complicidad y de conformidad con el párrafo b) del artículo III de la Convención, debían ser consideradas cómplices del crimen de apartheid y habían de ser procesadas por su responsabilidad en la perpetuación de ese crimen. En este sentido, el Grupo hizo un llamamiento a todos los Estados Partes en la Convención para que introdujeran en su legislación las disposiciones pertinentes.

#### V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

36. El Grupo de los Tres expresó su reconocimiento a los representantes de los Estados informantes por haber asistido a sus sesiones y tomó nota con satisfacción de que todos menos uno de los informes examinados en el período de sesiones en curso habían sido presentados por los representantes de los Estados informantes.

37. El Grupo elogió a los Estados Partes que habían presentado informes periódicos. Observó con preocupación que los 33 Estados Partes que se enumeraban en el documento E/CN.4/1990/32 no habían presentado informe alguno e instó en particular a los Estados Partes que no habían presentado aún sus informes iniciales a que lo hiciesen lo antes posible. El Grupo observó además con gran preocupación que, al 31 de diciembre de 1989, no se habían

recibido todavía más de 190 informes que debían presentarse con arreglo a la Convención e instó una vez más encarecidamente a los Estados Partes de que se trataba a que cumpliesen su obligación de presentar tales informes, con arreglo al artículo VII de la Convención. El Grupo exhortó a los Estados Partes en cuestión a que acelerasen la presentación de sus informes atrasados, como se pedía en la resolución 44/69 de la Asamblea General.

38. El Grupo observó con pesar que los informes presentados por algunos Estados Partes no se ceñían a sus directrices generales, y reiteró por ello una vez más su recomendación de que todos los Estados Partes se atengan estrictamente, al preparar sus informes, a las directrices generales relativas a la forma y al contenido de los mismos (E/CN.4/1286, anexo).

39. El Grupo observó con preocupación que en 1989 sólo un Estado se había adherido a la Convención. Manifestó asimismo su preocupación ante el hecho de que sólo 88 Estados hubieran llegado a ser Partes en ella. Convencido de que la ratificación de la Convención o la adhesión a la misma por parte de todos los Estados, así como la aplicación de sus disposiciones, eran necesarias para la eficacia de ese instrumento, el Grupo recomendó una vez más a la Comisión de Derechos Humanos que instase a que ratificaran la Convención o se adhirieran a ella sin demora a todos los Estados que aún no lo hubieran hecho, sobre todo los Estados que tenían jurisdicción sobre empresas transnacionales que operaban en Sudáfrica.

40. El Grupo hizo un llamamiento a todos los Estados Partes en la Convención para que, de conformidad con el artículo II de la Convención, introdujeran en su legislación disposiciones sobre el "crimen de apartheid", con inclusión de las prácticas de segregación y discriminación racial, y para que de acuerdo con el artículo IV b) de la propia Convención, establecieran penas apropiadas para las personas culpables de tal crimen. A este respecto el Grupo reiteró la opinión que ya había expresado anteriormente, de que debía estudiarse la posibilidad de redactar una legislación modelo que sirviera de guía a los Estados Partes para la aplicación de las disposiciones de la Convención.

41. El Grupo hizo una vez más por conducto de la Comisión de Derechos Humanos, un llamamiento a los Estados Partes para que intensificasen su cooperación en el plano internacional, y para que adoptasen medidas legislativas y administrativas a fin de aplicar plena y prontamente, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad y otros órganos competentes de las Naciones Unidas y sus organismos especializados con miras a prevenir, reprimir y castigar el crimen de apartheid, de conformidad con el artículo VI de la Convención.

42. El Grupo tomó nota de la resolución 1989/27 del Consejo Económico y Social, en la que el Consejo condenó a las empresas transnacionales que seguían colaborando con el régimen minoritario racista de Sudáfrica en desafío de las resoluciones de las Naciones Unidas y la opinión pública internacional y, en muchos casos, en violación de las medidas adoptadas por sus países de origen.

43. El Grupo instó a todos los Estados cuyas empresas transnacionales siguiesen manteniendo relaciones comerciales con Sudáfrica a que tomaran medidas urgentes para poner fin a sus operaciones allí. Instó asimismo a los

países en desarrollo a que tomaran medidas concertadas para persuadir a las empresas transnacionales, en particular las que comerciaban en su territorio, a que pusieran fin a sus operaciones en Sudáfrica.

44. El Grupo recomendó a la Comisión que pidiera al Secretario General que diese amplia publicidad a la lista de bancos, empresas transnacionales y otras organizaciones que operaban en Sudáfrica, lista que se reflejaba en el estudio actualizado preparado por el Relator Especial Sr. Ahmed Khalifa (E/CN.4/Sub.2/1989/9 y Corr.1 y Add.1), que diese a la lista la mayor difusión posible, en particular por conducto de los centros de información de las Naciones Unidas en todo el mundo, y que informase a la Comisión en su 47° período de sesiones sobre la aplicación de esa disposición.

45. El Grupo señaló una vez más que el crimen de apartheid era una forma de genocidio, de naturaleza similar a la de los crímenes del fascismo y del nazismo, y que, por lo tanto, cabía dentro de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. El Grupo recomendó a la Comisión de Derechos Humanos que reflejase esa similitud en las resoluciones correspondientes y que subrayase que la adhesión a la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid es un paso hacia la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

46. El Grupo, recordando en particular el párrafo 3 de la resolución 3068 (XXVIII) de la Asamblea General, por la que se adoptó la Convención, así como la resolución 44/69 de la Asamblea General, señaló una vez más a la atención de los órganos de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y de las organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales la necesidad de intensificar las actividades encaminadas a lograr que el público cobrase mayor conciencia del problema denunciando los crímenes cometidos por el régimen racista de Sudáfrica, y de intensificar asimismo sus esfuerzos, por los conductos pertinentes, para difundir información sobre la Convención y su aplicación. A ese respecto, el Grupo puso de relieve la importancia de la función de los medios de comunicación social.

47. El Grupo puso de relieve, una vez más, la importancia de las medidas que habían de adoptarse en la esfera de la enseñanza y de la educación para lograr una aplicación más completa de la Convención e invitó a los Estados Partes a que incluyeran información sobre tales medidas en sus informes.

48. El Grupo continuó pensando que la aplicación del artículo V de la Convención, relativo al establecimiento de un tribunal penal internacional, permitiría reforzar los mecanismos destinados a combatir el apartheid.

49. El Grupo reiteró su opinión de que se debía reforzar la asistencia prestada a los movimientos de liberación nacional en el África meridional y pidió a la comunidad internacional que contribuyese generosamente a tales movimientos.

50. El Grupo recomendó a la Comisión de Derechos Humanos que pidiese al Secretario General que invitase una vez más a los Estados Partes en la Convención que aún no lo hubieran hecho a que expresasen su parecer sobre el alcance y la naturaleza de la responsabilidad de las empresas transnacionales por la persistencia del sistema de apartheid en Sudáfrica.

51. El Grupo recomendó a la Comisión de Derechos Humanos que pidiese al Secretario General que invitase a los Estados Partes en la Convención, a los organismos especializados y a las organizaciones no gubernamentales a que facilitasen a la Comisión la información pertinente sobre los tipos de crimen de apartheid incluidos en el artículo II de la Convención que habían sido cometidos por las empresas transnacionales que operaban en Sudáfrica.

52. El Grupo reiteró su convicción de que el medio más importante de que disponía la comunidad internacional para poner fin al sistema de apartheid consistía en imponer sanciones amplias y obligatorias contra el régimen racista de Sudáfrica. Al mismo tiempo, el Grupo consideró que sería conveniente hacer serios esfuerzos para poner fin a la política y las prácticas de apartheid del Gobierno de Sudáfrica mediante negociaciones basadas en los principios de justicia y paz para todos formulados en la Declaración sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas para el Africa meridional, aprobada por unanimidad en la resolución S-16/1, adoptada por la Asamblea General en su 16º período extraordinario de sesiones con fecha 14 de diciembre de 1989.

#### VII. APROBACION DEL INFORME

53. En su sesión de 26 de enero de 1990, el Grupo examinó el proyecto de informe sobre la labor realizada en su período de sesiones de 1990. El proyecto de informe, con las modificaciones introducidas durante el debate, fue aprobado por unanimidad.

-----